

La miopía del "NEW GREEN DEAL"

Uno de los grandes reclamos de la agenda política actual es el llamado Pacto Verde. Una propuesta que, como casi todas las respuestas políticas a problemas complejos y de tipo económico, se basa en dar respuesta en base únicamente a dos palancas: gasto público e intervencionismo económico. No es por tanto un enfoque nuevo, al contrario, es el "business as usual" a la hora de afrontar cualquier reto desde lo público de un tiempo a esta parte; pueden cambiar los nombres, las etiquetas, incluso el relato político, pero la lógica de este tipo de programas es siempre la misma. Es por eso que resulta pertinente entender la visión económica que subyace a este tipo de planteamientos basados en pretendidos "estímulos", que implican ineluctablemente un incremento, en menor o mayor grado, del nivel de intervencionismo y planificación en la economía (ya de por sí altos y fuentes de futuros problemas), para poder así entender las limitaciones de este enfoque.

Lo de los planes de "gasto" es algo que, como decíamos, viene de lejos. En 2008, y en el contexto de la crisis financiera, la Unión Europea diseñó un enorme plan de estímulo para reactivar el crecimiento y el empleo. Dicho plan, que representó entonces hasta el 1,5% del PIB europeo, y con una lógica muy similar al Plan E de Zapatero, pretendía generar empleo a través del gasto público en infraestructuras. Pese a sus buenas intenciones y proclamación con gran pompa, únicamente sirvió para multiplicar por dos el déficit público añadiendo presión fiscal al grueso del tejido productivo especialmente en los países más afectados por la crisis, sujeto a las leyes de demanda del mercado (que un Real Decreto no cambia), siempre con mejores incentivos, más prudente, diligente y eficaz a la hora de invertir recursos.

A este plan de gasto, luego se sumó el llamado "Plan Juncker", que quería ahondar en estas cuestiones de hasta 420.000 millones de euros adicionales. La activación de estas palancas, condicionó aún más la política monetaria del Banco Central Europeo que llegó al extremo de fijar los tipos en niveles negativos en 2016 para asistir a los Estados miembros en su escalada de gasto y deuda, al tiempo que se desincentivaba la implementación de reformas encaminadas a solucionar problemas reales. Unos tipos que ahí se han quedado añadiendo toda una serie de disfuncionalidades en los mercados financieros, empezando por imposibilidad de facto en normal funcionamiento del negocio bancario, favoreciendo una gestión imprudente del riesgo, e imposibilitando el ahorro. El resultado de nuevo fue el estancamiento de la productividad y de la producción industrial que a

finales de 2019 se situaban en los niveles más bajos de los últimos cinco años. Una realidad que invita a la cautela ante nuevos planes diseñados con el mismo patrón.

La última iniciativa de Bruselas, proclamada por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen es la de impulsar un nuevo plan de gasto y de intensificación del intervencionismo, el llamado "Pacto Verde", o "Green New Deal" en inglés en alusión a las políticas de Roosevelt durante la década de los 30s.

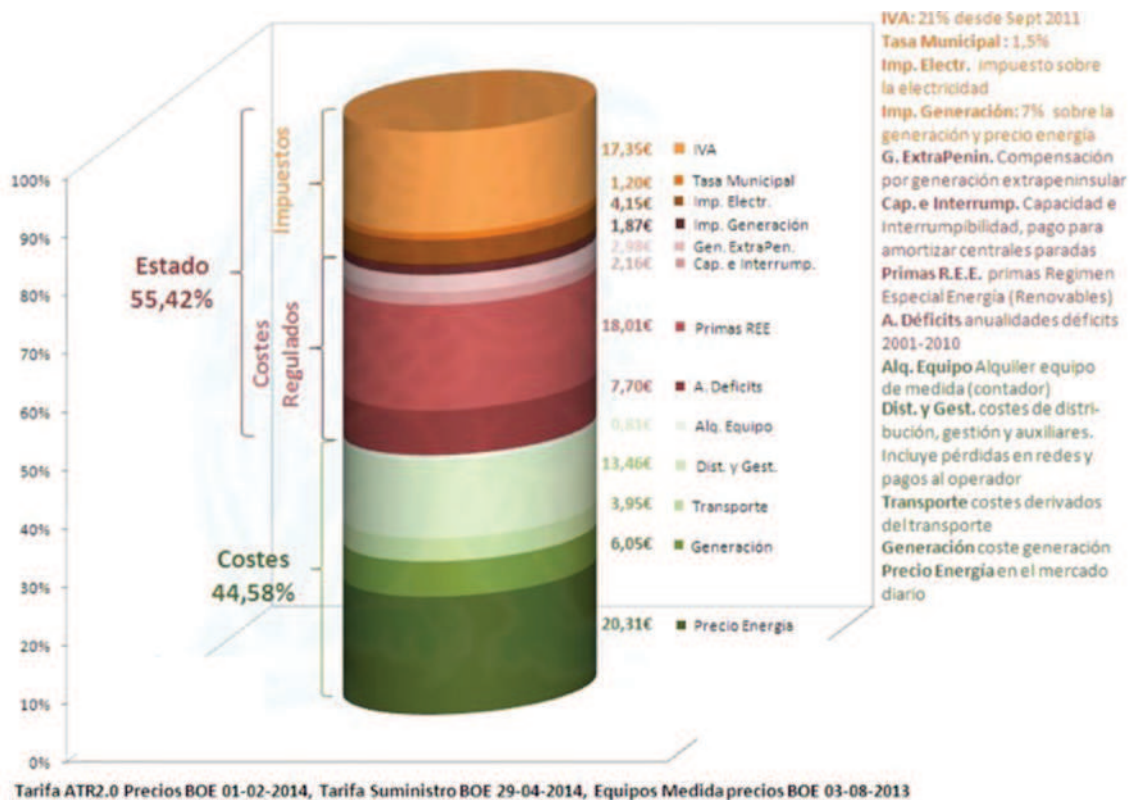


El camino hacia el Pacto Verde

En 2009, el Parlamento Europeo y la Comisión derogaban las directivas 2001/77/EC y 2003/30/EC que habían servido de base para la liberalización de los mercados energéticos europeos por la Directiva 2009/28/EC que buscaba fomentar vía positivismo legislativo el uso intensivo de energías renovables. Desde entonces, las facturas del gas y de la luz en los hogares europeos se ha incrementado más del doble que el de los hogares en Estados Unidos. En 2016, el precio del kW/h en Europa se situaba, en media, en los 26,6 céntimos de Euro en comparación los 12,7 en Estados Unidos. El caso de España es especialmente dramático: en los últimos ocho años,

la factura de la luz se ha incrementado en más de un 75%, más que ningún otro país de nuestro entorno, siendo el coste político y fiscal del recibo de la luz un 55% del total; una subida que coincide en el tiempo con un languidecimiento de los salarios reales por falta de reformas pro-crecimiento y competitividad: los salarios dependen de la productividad marginal, no de las políticas de gasto de Bruselas o de impresión de billetes por parte del Banco Central Europeo. Es imposible entender la anémica actividad económica e industrial real y el abultado desempleo en nuestro país sin tener en cuenta estos elementos.

Precio energía eléctrica, por cada 100 Eur (2016)



Fuente: Israel Cabrera (@ absolutexe).

Lo peor de todo, es que este empobrecimiento generalizado de las clases medias y trabajadoras se ha querido aliviar vía crédito barato alumbrando unos hogares fragilizados por unos ingresos menguantes y una deuda creciente. Basta comprobar la bajísima tasa de ahorro en la mayoría de hogares. Por añaduría, debido a que este tipo de mal llamadas políticas de “estímulo” dejan enormes deudas en el sector público, las clases medias productivas no únicamente salen más debilitadas económicamente de estos procesos, sino que además ven como la sombra de la presión fiscal no para de crecer en un círculo vicioso que lleva años retroalimentándose.

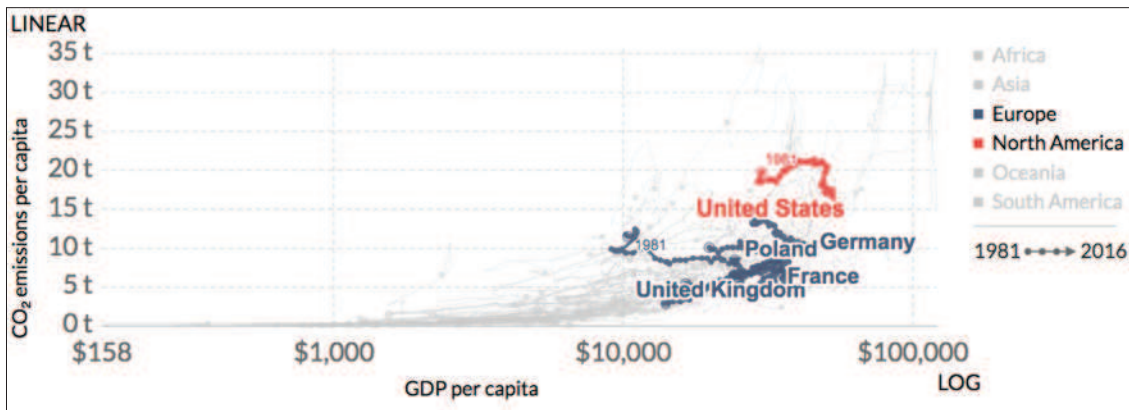
El “New Green Deal” es una nueva vuelta de tuerca en esta manera miope y maniquea de solucionar problemas complejos por la vía cartesiana de la planificación económica y el gasto público centralizado. Una vía costosa e ineficiente en un tema en el que además nos jugamos mucho. Por el contrario, y como ahora veremos, un mayor respeto al medio ambiente y una mejor utilización de los recursos disponibles pasa por una mayor acumulación de capital (ahorro), una mayor protección de los derechos de propiedad (corrección de externalidades vía impuestos cuando las haya), mejores instituciones, mayor competencia y peso de los procesos de mercados,

permitiendo el surgimiento de la innovación, la tecnología en un entorno donde pueda operar el cálculo económico con las menores restricciones posibles.

Lo cierto, además, es que existen abundantes muestras de cómo el mercado lleva ya años avanzando en este sentido. Muchas veces se tiene la sensación de que Estados Unidos, que está optando por otras estrategias para abordar los temas medio ambientales (recientemente incluso abandonando los Acuerdos de París) emite más CO2 que Europa cuando el nivel de sus emisiones se mantienen hoy a niveles de 1990, lo que supone un 14% por debajo de sus niveles máximos alcanzados en el año 2000 lo que supone el mayor descenso de emisiones alcanzado por ningún país según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). Todo esto se ha logrado principalmente vía la iniciativa privada descentralizada: EE UU es hoy ya el segundo mercado de energías renovables y es el país donde esta la

sede de Tesla, empresa líder mundial en el coche eléctrico e industrias adyacentes. La clave en el modelo americano, por otro lado muy perfectible en muchos aspectos, es apostar por la competencia de tecnologías, fijando impuestos a las externalidades cuando es difícil asignar derechos de propiedad (por ejemplo con la emisión de CO2), generando luego mercados secundarios que generan los incentivos para una mayor innovación, premiando las mejores compañías y tecnologías. Europa por su parte, y de forma altamente preocupante, está procurando el ambicioso objetivo de contar con una economía más "verde" vía gasto público, cada vez más politizado y que beneficia a tan solo unas pocas empresas, y una burbuja legislativa que entorpece la inversión y la innovación. De hecho, es Estados Unidos (sin necesidad de incrementar el gasto o la burbuja de positivismo legislativo), y no Europa, la región del mundo que más ha conseguido reducir la intensidad energética del PIB (véase siguiente gráfico).

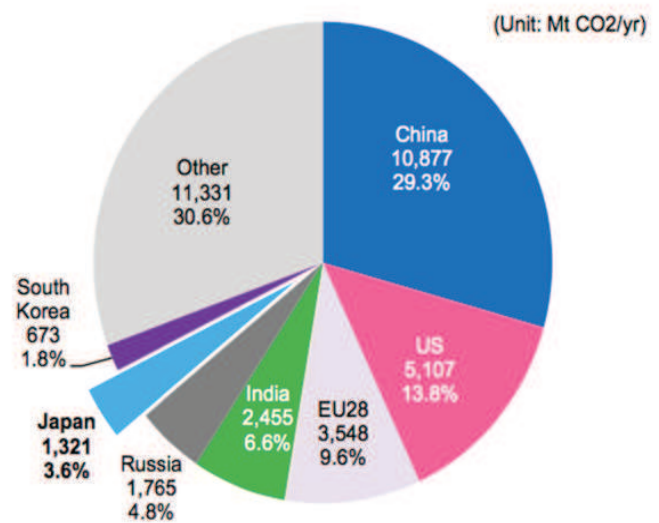
Evolución toneladas CO2 i PIB per cápita, 1981-2016



Fuente: IEA, Global Energy & Co OurWorld- InData.org

Europa, por su parte, y muy especialmente España (más papista que el Papa en estos temas), ha seguido inflando la complejidad de aviesos subsidios y ayudas a sectores altamente contaminantes, como las minas de carbón en Asturias y León (sólo entre 2006 y 2017 hasta 1.786 millones de Euros, además repartidos de manera irregular y sin control según un propio informe del Tribunal de Cuentas), erosionando los mecanismos disciplinadores propios de un proceso de mercado, limitando de facto su capacidad para dar con soluciones innovadoras y competitivas. Al final, el "New Green Deal" se convierte en un gran plan de gasto y regulación que entorpece el libre funcionamiento de los mercados, premiando a los jugadores menos "verdes", menos competitivos, protegiéndoles de la competencia disruptiva, mucho más sostenible y eficiente.

Distribución de emisiones de CO2 a nivel global por país (2017)



Fuente: Nomura . Datos de la Comisión Europea para 2017. Volumen total emisiones: 37.077 millones de toneladas (Mt).

La miopía de estos planes se constata cuando sus impulsores confunden consumo (o PIB), con creación de riqueza y empleo. Recientemente, el Gobierno cuantificaba en 15.000 y 25.000 millones en el PIB ignorando el efecto expulsión que supone la financiación de todo este gasto, vía impuestos (y también inflación), lo que tiene un efecto neto negativo en términos de riqueza y empleo. Al final, subyace la sencilla pregunta de que si este tipo de proyectos tienen este elevado retorno, porque no los desarrolla el sector público. De nuevo, estamos ante un enfoque de pretender solucionar un problema económico complejo vía planificación y gasto y lo previsible es que los resultados sean como hasta ahora: asfixia a la economía productiva, más deuda, más presión fiscal sobre las clases trabajadoras, y precios más altos. Un enfoque que refuerza y prioriza el rol del Estado, y de asegurarse tanto su importancia en la economía, como la captación de impuestos, pero no la resolución real y práctica de problemas concretos.

Por añaduría, este enfoque únicamente incrementa los riesgos de futuras crisis de deuda que, como hemos visto, estas pueden darse incluso en un entorno de tipos cero (generado artificialmente por el BCE) cuando los inversores dudan de la solvencia de los distintos emisores.

Precios y cálculo económico

El gran problema de las políticas de gasto es de incentivos: existe la tentación de pensar que los recursos son infinitos lo que conduce al despilfarro y la ineficiencia, especialmente en países como España caracterizados por una muy baja eficiencia del gasto público y de la función pública. Además, este gasto suele ser un foco (una tentación) para la corrupción y clientelismo. Es por eso que cuando realmente se necesita desarrollar proyectos que requieren de una dimensión social, como la red de carreteras, la mejor manera (o la menos mala) es acudir a programas de concesiones.

Volviendo al pacto verde, como decíamos, si lo que realmente persiguiere es mejorar el respeto al medio ambiente, centraría su acción en ver como mejorar la asignación de derechos de propiedad, buscando soluciones "second best" (o subóptimas), como dicen los economistas, en aquellos casos en donde esta asignación de derechos de propiedad es más compleja, y muy especialmente con respecto a las emisiones de CO₂. Pese a que resulta imposible saber a ciencia cierta cuál es el coste de emitir una toneladas de CO₂ a la atmósfera, podemos convenir que la alteración de un bien público que genera un beneficio privado, en este caso para la empresa que emite esta tonelada, requiere de una corrección. Estamos ante una situación típica de externalidad negativa;

una situación asimétrica donde los incentivos de parte y del "bien común" se dislocan.

El problema que se nos plantea ahora es el de saber el valor económico de esta emisión; cuál es el coste en términos monetarios para fijar un impuesto que recoja este coste en términos de desgaste del medio ambiente, igual que las amortizaciones quieren reflejar la utilización del activo material, para luego fijar un impuesto acorde. Al final de lo que se trata es de no alterar el proceso dinámico del mercado, que junto a la propiedad permite la correcta asignación de precios (información relativa a la escasez relativa de los bienes en relación a otros bienes) asegurando la correcta y responsable utilización de los recursos disponibles. Cuando el precio de algo sube, es un aviso a la demanda para que racionalice el consumo de ese determinado bien; al tiempo que es un aviso a la oferta para que dedique más inversiones a la producción de este determinado bien. Interferir en los precios por parte del intervencionismo estatal únicamente provoca burbujas de todo tipo.

Cuantificar el coste exacto de una tonelada de CO₂ es complejo, y únicamente podemos arrojar un valor aproximativo, al no existir ningún ser omnisciente capaz de fijar ese "precio justo" del que ya hablo el escolástico español Juan de Lugo de una tonelada de CO₂. Además, que puede no ser único. Una alternativa es fijar cuotas a estas emisiones, en base a históricos y el tamaño de cada industria, para, a partir de este punto inicial, permitir un mercado secundario de emisiones donde las empresas que con mayor celeridad son capaces de producir más con menos (en este caso menos emisiones) puedan lucrarse vendiendo sus derechos de emisión sobrantes a empresas menos competitivas y que necesitan comprar a terceros estos derechos para poder seguir operando normalmente. Un planteamiento que resume las tesis principales propuestas por el Nobel de Economía William Nordhouse. **Un esquema que funciona de manera idéntica pero a la inversa a la hora de reconocer el valor económico que cumplen los propietarios forestales cuyo cuidado de sus fincas y expansión de la masa forestal contribuye, en este caso, a la absorción de CO₂; una absorción que tiene lógicamente también un valor económico que hoy (por cierto) todavía esta pendiente de reconocer.**

En definitiva, es importante que cualquier ley o iniciativa de tipo medioambiental –más si bien de instancias supranacionales (donde el margen de error es potencialmente mayor)–, tiene que tener en cuenta cómo funcionan (cómo innovan) los mercados, atendiendo son solvencia y rigor al necesario análisis coste-beneficio de las leyes que se aprueban así como sus efectos secundarios como advirtió de forma célebre el economista francés Frédéric Bastiat.